**REF: ACCION DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA**

**ACCIONANTE: PEDRO REGALAO ROMERO**

**ACCIONADO: ALCALDÍA DE TENERIFE, MAGDALENA**

**RAD: 2020-00060-00**

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**

**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**

**JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE TENERIFE**

TENERIFE, 29 DE OCTUBRE DE 2020

AL DESPACHO INFORMANDO QUE DENTRO DEL TERMINO LA PARTE ACCIONADA Y VINCULADAS CONTESTARON. LA PARTE ACCIONADA, ALEGÓ LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA EN VISTA QUE, NO S EHAQN VENCIDO LOS TERMINOS CONFOMRE LO DISPONE EL ARTICULO 491 DE 2020.

POR OTRA PARTE, LAS ENTIDADES VINCULADAS ALEGARON LA FALTA DE LEGITIMACION POR PASIVA EN LA CAUSA.

SE DEJA CONSTANCIA QUE DENTRO DEL TERMINO EL PROCURADOR PROVINCIAL INFORMO LA EDXISTENCIA DEL PROCESO DE CARÁCTER PREVENTIVO EN CONTRA DE LA ALCALDÍA Y SE ENCIUENTRA EN ETAPA DE PRUEBAS.

AL DESPACHO PARA SU RELSPECTUIVA ORDEN.

ANA MARIA RINCON MARQUEZ

SECRETARIA

**REPÚBLIA DE COLOMBIA**

**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**

**JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE TENERIFE**

**TENERIFE, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE (2020)**

**REF: ACCION DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA**

**ACCIONANTE: PEDRO REGALAO ROMERO**

**ACCIONADO: ALCALDÍA DE TENERIFE, MAGDALENA**

**RAD: 2020-00060-00**

**SENTENCIA DE TUTELA 1 INSTANCIA No. 06 IV TRIMESTRE DE 2020**

**ASUNTO:**

Procede el despacho en sede de primera instancia a resolver la acción de tutela de la referencia interpuesta por el señor Pedro Regalao Romero en contra de la Alcaldía Municipal de Tenerife, Magdalena, representante legalmente por el señor Freddy Ramos Hernández, por la presunta vulneración de su ejercicio de derecho de petición.

1. **ANTECEDENTES:**

**HECHOS:**

1. Narra el petente que laboró en la alcaldía Municipal de Tenerife en los cargos de Coordinador del DPS Municipal desde el mes de junio de 2019 hasta el doce (12) agosto de 2019, fecha en la cual renunció al cargo.
2. Alega que, el trece (13) de agosto del mismo año, fue nombrado Secretario del Interior Municipal hasta el día 20 de noviembre de 2019, fecha en la cual fue cesado del cargo por el alcalde de turno. Por ende, de las fechas invocadas del mes de noviembre de 2019 la alcaldía Municipal de Tenerife, le adeuda veinte (20) días laborados en esa entidad.
3. Recalca que, con base en los hechos antes expuestos y en vista que no ha habido solución en el tema, decidió elevar un derecho de petición, con fundamento jurídico en el artículo 23 de la norma superior; el cual fue recibido por el funcionario competente para ello el día primero (1) de octubre del año en curso visible en los anexos adjuntos, con el fin que, la alcaldía Municipal de Tenerife le respondiera las razones o motivos por las cuales hasta la fecha no le habían pagado los veinte días de salario del mes de noviembre de 2019 junto a la respectiva liquidación de prestaciones sociales. Sin embargo, a la fecha de presentación de esta acción de tutela no le han dado respuesta de fondo a la petición.

**PRETENSIONES**

Con fundamento en los hechos expuesto solicita el accionante:

1. Amparar mediante fallo de tutela el derecho constitucional de petición del que es titular en esta ocasión.
2. La respuesta del derecho de petición sea de fondo, clara y ajustada a derecho sobre las peticiones del derecho de petición a ellos incoado por el suscrito.

**TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA**

Mediante auto de fecha veintiséis (26) de octubre de dos mil veinte (2020), el despacho admitió el trámite tutelar en contra de la Alcaldía de Tenerife y vinculo a las entidades: 1. Departamento de Prosperidad Social- DPS y 2. A la Secretaría de Interior. Igualmente, se vincula al Departamento de Prosperidad Social a nivel Nacional y a la Procuraduría Provincial del Carmen de Bolívar, siendo notificados a través de los oficios Nos: 0883 al 0886 y corriéndoseles el traslado para que dentro del término de 48 horas, respondieran.

.

**CONTESTACION DE LA ACCION DE TUTELA**

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE TENERIFE**

Una vez notificado y descorrido el traslado venció el término y contestó oportunamente alegando que, no existe vulneración del derecho de petición toda vez que, el Decreto 491 de 2020, amplió el plazo para que las entidades públicas respondieran las peticiones estando dentro del término.

**DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD SOCIAL- DPS – MUNICIPAL**

Guardó silencio

**LA SECRETARÍA DE INTERIOR MUNICIPAL**

Guardo silencio

**DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD SOCIAL A NIVEL NACIONAL**

Guardó silencio

**LA PROCURADURÍA PROVINCIAL DEL CARMEN DE BOLÍVAR**

Guardo silencio.

**PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE:**

1. ESCRITO DE TUTELA FL. 1-5
2. COPIA DE LA CONSTANCIA DE ENVIÓ EN PDF.
3. COPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANÍA DEL ACCIONANTE.
4. ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL

**CONSIDERACIONES**

**Competencia**

El Juzgado Promiscuo Municipal de Tenerife, Magdalena, en desarrollo de las facultades conferidas por el Dcto. 2591 de 1991, es competente para conocer en sede de primera instancia la acción de tutela interpuesta.

**Problema jurídico y esquema de solución**

Corresponde al despacho determinar si la Alcaldía Municipal de Tenerife, Magdalena, vulneró el derecho fundamental de petición de información del señor Pedro Regalao Romero, al no contestar el derecho de petición de fecha 4 de octubre de 2020, en el que solicita la entrega de documentos conforme a la relación laboral que obtuvo previamente con ellos.

Conforme a lo anterior, se hace pertinente estudiar el núcleo esencial del derecho de petición, conforme a la Jurisprudencia Sentencia T-230/20 con Ponencia del Magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez, expuso el tema concerniente del derecho de petición, así:

***“ Caracterización del derecho de petición. El artículo 23 de la Constitución dispone que “[t]oda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución.” Esta garantía ha sido denominada derecho fundamental de petición, con el cual se promueve un canal de diálogo entre los administrados y la administración, “cuya fluidez y eficacia constituye una exigencia impostergable para los ordenamientos organizados bajo la insignia del Estado Democrático de Derecho”[[1]](#footnote-1). De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, esta garantía tiene dos componentes esenciales: (i) la posibilidad de formular peticiones respetuosas ante las autoridades, y como correlativo a ello, (ii) la garantía de que se otorgue respuesta de fondo, eficaz, oportuna y congruente con lo solicitado. Con fundamento en ello, su núcleo esencial se circunscribe a la formulación de la petición, a la pronta resolución, a la existencia de una respuesta de fondo y a la notificación de la decisión al peticionario.***

***4.5.2. Formulación de la petición. En virtud del derecho de petición cualquier persona podrá dirigir solicitudes respetuosas a las autoridades, ya sea verbalmente, por escrito o por cualquier otro medio idóneo (art. 23 CN y art. 13 CPACA). En otras palabras, la petición puede, por regla general, formularse ante autoridades públicas, siendo, en muchas ocasiones, una de las formas de iniciar o impulsar procedimientos administrativos. Estas últimas tienen la obligación de recibirlas, tramitarlas y responderlas de forma clara, oportuna, suficiente y congruente con lo pedido, de acuerdo con los estándares establecidos por la ley[[2]](#footnote-2).***

***4.5.3. Pronta resolución. Otro de los componentes del núcleo esencial del derecho de petición, consiste en que las solicitudes formuladas ante autoridades o particulares deben ser resueltas en el menor tiempo posible, sin que se exceda el término fijado por la ley para tal efecto.***

***4.5.3.1. El artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 dispone un término general de 15 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud para dar respuesta, salvo que la ley hubiera determinado plazos especiales para cierto tipo de actuaciones[[3]](#footnote-3). Esa misma disposición normativa se refiere a dos términos especiales aplicables a los requerimientos de documentos o información, y a las consultas formuladas a las autoridades relacionadas con orientación, consejo o punto de vista frente a materias a su cargo. Los primeros deberán ser resueltos en los 10 días hábiles siguientes a la recepción, mientras que los segundos dentro de los 30 días siguientes.***

***Cuando se trata de peticiones relacionadas con la solicitud de documentos o de información, el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 establece un silencio administrativo positivo que opera cuando no se ha brindado respuesta dentro del término de 10 días hábiles que consagra la norma. En esos eventos, la autoridad debe proceder a la entrega de los documentos dentro de los tres días hábiles siguientes al vencimiento del plazo.***

***Como ya se anunciaba, el plazo para la respuesta de fondo se contabiliza desde el momento en que la autoridad o el particular recibieron la solicitud por cualquiera de los medios habilitados para tal efecto, siempre que estos permitan la comunicación o transferencia de datos. En otras palabras, los términos para contestar empiezan a correr a partir de que el peticionario manifiesta su requerimiento, (i) ya sea verbalmente en las oficinas o medios telefónicos, (ii) por escrito –utilizando medios electrónicos que funcionen como canales de comunicación entre las dos partes, o por medio impreso en las oficinas o direcciones de la entidad pública o privada–, o (iii) también por cualquier otro medio que resulte idóneo para la transferencia de datos.***

***4.5.4. Respuesta de fondo. Otro componente del núcleo esencial supone que la contestación a los derechos de petición debe observar ciertas condiciones para que sea constitucionalmente válida. Al respecto, esta Corporación ha señalado que la respuesta de la autoridad debe ser: “(i) clara, esto es, inteligible y contentiva de argumentos de fácil comprensión; (ii) precisa, de manera que atienda directamente lo pedido sin reparar en información impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas ; (iii) congruente, de suerte que abarque la materia objeto de la petición y sea conforme con lo solicitado; y además (iv) consecuente con el trámite que se ha surtido, de manera que, si la respuesta se produce con motivo de un derecho de petición formulada dentro de un procedimiento del que conoce la autoridad de la cual el interesado requiere la información, no basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de una petición aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la petición resulta o no procedente”[[4]](#footnote-4) (se resalta fuera del original).***

***La respuesta de fondo no implica tener que otorgar necesariamente lo solicitado por el interesado[[5]](#footnote-5), salvo cuando esté involucrado el derecho de acceso a la información pública (art. 74 C.P.[[6]](#footnote-6)), dado que, por regla general, existe el “deber constitucional de las autoridades públicas de entregarle, a quien lo solicite, informaciones claras, completas, oportunas, ciertas y actualizadas sobre cualquier actividad del Estado***

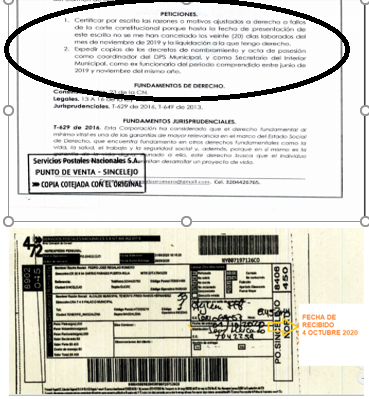
***4.5.5. Notificación de la decisión. Finalmente, para que el componente de respuesta de la petición se materialice, es imperativo que el solicitante conozca el contenido de la contestación realizada. Para ello, la autoridad deberá realizar la efectiva notificación de su decisión, de conformidad con los estándares contenidos en el CPACA[[7]](#footnote-7). El deber de notificación de mantiene, incluso, cuando se trate de contestaciones dirigidas a explicar sobre la falta de competencia de la autoridad e informar sobre la remisión a la entidad encargada.***

***4.5.6.1. Formas de canalizar las peticiones. El derecho de petición se puede canalizar a través de medios físicos o electrónicos de que disponga el sujeto público obligado, por regla general, de acuerdo con la preferencia del solicitante. Tales canales físicos o electrónicos pueden actuarse de forma verbal, escrita o por cualquier otra vía idónea que sirva para la comunicación o transferencia de datos[[8]](#footnote-8).***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Manifestaciones del derecho de petición** | | |
| Según el interés que persigue | Petición de interés general | Se puede presentar en diferentes supuestos: cuando se pretende que la autoridad intervenga en la satisfacción de necesidades de los miembros de la sociedad, o como forma de participación del ciudadano en la función pública, entre otros. |
| Petición de interés particular | A través de su uso se persigue el reconocimiento o la garantía de derechos subjetivos. |
| Según la pretensión invocada | Solicitud de información o documentación | Tienen el objeto de obtener acceso a información o documentos relativos a la acción de las autoridades correspondientes. |
| Cumplimiento de un deber constitucional o legal | Actuación que impulsa una persona para exigir a la autoridad el cumplimiento de una función o un deber consignado en las normas que lo rigen, sin necesidad de iniciar un procedimiento judicial para tal efecto. |
| Garantía o reconocimiento de un derecho | El requerimiento se encamina al reconocimiento de un derecho o a la garantía del mismo a partir de una acción de la autoridad respectiva. |
| Consulta | Se formula a efectos de que la autoridad presente su punto de vista, concepto u opinión respecto de materias relacionadas con sus atribuciones. La respuesta de este tipo de petición no supone la configuración de un acto administrativo, toda vez que lo remitido por la autoridad no es vinculante, ni produce efectos jurídicos y contra ella no proceden recursos administrativos o acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo[[9]](#footnote-9). |
| Queja | Comunicación en la que se manifiesta una inconformidad o descontento en relación con una conducta o acción de las autoridades en el desarrollo de sus funciones. |
| Denuncia | Poner en conocimiento de la autoridad respectiva una conducta, con el fin de que, si así lo estima y por las vías pertinentes, se adelante la investigación que corresponda[[10]](#footnote-10). |
| Reclamo | Es la exigencia o demanda de una solución ante la prestación indebida de un servicio o falta de atención de una solicitud. |
| Recurso | Figura jurídica a través de la cual se controvierten decisiones de la administración para que las modifique, aclare o revoque |

**5. Caso concreto**

1. En el caso bajo estudio y lo anteriormente precisado jurisprudencialmente, tenemos que efectivamente el actor presentó un escrito de petición ejercitando su derecho fundamental, el cual fue recibido el día 4 de octubre de 2020, por la Alcaldía de Tenerife y requiriendo entrega de documentos conforme a su relación laboral, así:



Conforme a lo anterior, se tiene que el articulo 14 de la Ley 1437 de 2011 dispone un término especial para responder las peticiones aplicables a los requerimientos de documentos o información, debiendo ser resueltos en los 10 días hábiles siguientes a la recepción. Por ende, el termino prudencial para responder era el día 19 de octubre de 2020, sin embargo no sucedió así.

Ahora, la entidad Municipal, alega que, no existe vulneración del derecho fundamental de petición debido a que el Decreto legislativo 491 de 2020, amplió los términos a las entidades públicas para responder las peticiones.

Conforme a lo anterior, se citaran varios apartes que nos interesan del Decreto 491 de 2020, por el cual se adoptaron unas medidas a nivel nacional de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, así:

**Parte considerativa del Decreto:**

*“ (…) Que es necesario tomar medidas para ampliar o suspender los términos cuando el servicio no se pueda prestar de forma presencial o virtual, lo anterior, sin afectar derechos fundamentales ni servicios públicos esenciales.*

*Que el artículo 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala que,* ***«Salvo horma legal especial, y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá· resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: 1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. [ ... ] 2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción [ ... ]».***

*Que los términos establecidos en el precitado artículo resultan insuficientes dadas las medidas de aislamiento social tomadas por el Gobierno nacional en el marco de los hechos que dieron lugar a la Emergencia Económica, Social y Ecológica, y las capacidades de las entidades para garantizarle a todos sus servidores, especialmente en el nivel territorial, los controles, herramientas e infraestructura tecnológica necesarias para llevar a cabo sus funciones mediante el trabajo en casa, razón por la cual se hace necesario ampliar los términos para resolver las distintas modalidades de peticiones,* *con el propósito de garantizar a los peticionarios una respuesta oportuna, veraz, completa, motivada y actualizada”.*

**Parte Resolutiva:**

*“ (…) Artículo 1. Ámbito de aplicación. El presente Decreto aplica a todos los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público en sus distintos órdenes, sectores y niveles, órganos de control, órganos autónomos e independientes del Estado, y a los particulares cuando cumplan funciones públicas. A todos ellos se les dará el nombre de autoridades.*

*Artículo 5. Ampliación de términos para atender las peticiones. Para las peticiones que se encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se ampliarán los términos señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, así: Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:*

*(i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte (20) días siguientes a su recepción*

*(ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a su recepción.*

*Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en el presente artículo expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto en este artículo.*

*En los demás aspectos se aplicará lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011. Parágrafo.* ***La presente disposición no aplica a las peticiones relativas a la efectividad de otros derechos fundamentales***

*Artículo 19. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación”.(negrillas y subrayas del despacho).*

Conforme a lo anterior, se debe precisar que las disposiciones sobre la materia se entenderán contemplados durante el tiempo que dura la emergencia ocasionada por el covid-19, de tal manera, que, le permita a las entidades u organismos públicos sortear la contingencia que origina la pandemia y atender los requerimientos de sus grupos de valor, sin que ello derive en una modificación permanente de los términos para atender los derechos de petición contenidos en el artículo [14](https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=41249#14) de la Ley 1437 de 2011.

Es que, precisamente el tópico central por el cual la H. Corte Constitucional, declaró exequible el Decreto 491 de 2020, a través del expediente RE-253 – Sentencia C-242/20 (julio 9) con Ponencia del Magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez y Cristina Pardo Schlesinger, es que, la ampliación de términos para atender las peticiones contemplada en el artículo 5°, es una medida que a pesar de modificar normas de rango estatutario, es constitucional, ya que se trata de una disposición transitoria que sin afectar el núcleo esencial del derecho de petición, pretende racionalizar la prestación del servicio público de forma estrictamente proporcional ante la imposibilidad de que todas las solicitudes puedan ser contestadas en los tiempos contemplados para el efecto en condiciones ordinarias, debido a las consecuencias de la pandemia que afectaron de forma grave el funcionamiento de algunas entidades de la administración.

En este sentido, se resaltó que los nuevos plazos establecidos aplican sólo para solicitudes que no involucren la efectividad de prerrogativas fundamentales, así como que no desconocen el criterio de oportunidad que subyace a la consagración superior del derecho de petición, ya que son proporcionales en función de las posibilidades fácticas actuales de operación de la administración en el país. Con todo, a fin de garantizar el principio de igualdad, se condicionó el artículo 5° bajo el entendido de que la ampliación de términos que contempla para solucionar las peticiones es extensible a los privados que deben atender solicitudes, pues, de conformidad con la legislación vigente sobre la materia, se encuentran en una situación similar a la de las autoridades.

En este contexto, la H. Corte Constitucional, observó que en el artículo 5° del Decreto 491 de 2020 se contempló la ampliación de los términos para contestar las peticiones consagrados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –CPACA-, siempre y cuando la petición no estuviera dirigida a satisfacer prebendas de carácter constitucional, de la siguiente forma:

|  |  |
| --- | --- |
| **Término general para resolver peticiones** | |
| Art. 14 CPACA: 15 días | Art. 5° Dto. 491/20: 30 días (no aplica para peticiones relativas a la efectividad de derechos fundamentales). |
| **Término para resolver peticiones de documentos y de información** | |
| Art. 14 CPACA: 10 días | Art. 5° Dto. 491/20: 20 días (no aplica para peticiones relativas a la efectividad de derechos fundamentales). |
| **Término para resolver peticiones referentes a consultas** | |
| Art. 14 CPACA: 30 días | Art. 5° Dto. 491/20: 35 días (no aplica para peticiones relativas a la efectividad de derechos fundamentales). |
| **Ampliación de términos ante la imposibilidad de resolver la petición** | |
| Art. 14 CPACA: plazo razonable que defina la entidad, el cual, en todo caso, no podrá exceder del doble de los términos expuestos, con lo cual la respuesta a la petición puede llegar a tardarse hasta 30, 20 y 60 días dependiendo el tipo de solicitud. | Art. 5° Dto. 491/20: plazo razonable que defina la entidad, el cual, en todo caso, no podrá exceder del doble de los términos expuestos, con lo cual la respuesta a la petición puede llegar a tardarse hasta 60, 40 y 70 días dependiendo el tipo de solicitud. Lo anterior no aplica para las peticiones relativas a la efectividad de derechos fundamentales, frente a las cuales se aplican los términos del artículo 14 del CPACA, al igual que en torno a los aspectos no regulados específicamente. |

Es decir, que la petición del actor la cual va dirigida satisfacer su derecho laboral conforme a la prestación laboral que tuvo con la Alcaldía en el año 2019, en aras de reconocerle posteriormente ésta un derecho de ráiganme económico laboral y a su vez, derecho adquirido, no le aplica la disposición de ampliación de términos del Decreto 4941 de 2020, pues precidamente el parágrafo del articulo 5°, precisa que el limite a esa facultad de poder ampliar el termino es que no este dirigida a satisfacer derechos fundamentales.

Por ende, no es necesario modular el alcance del artículo 5° del Decreto 491 de 2020 para indicar de forma expresa que la ampliación de términos no aplica para asuntos referentes a prerrogativas constitucionales específicas (v. gr. acceso a la información pública, salud, mínimo vital, etc.) o solicitudes con regulaciones especiales (v. gr. solicitudes de control político), porque se trataría de un condicionamiento redundante y podría generar el efecto de que se entienda que los temas que no se mencionen en el mismo quedan por fuera de su alcance.

En conclusión, al ser el texto normativo claro en disponer que ***“la presente disposición no aplica a las peticiones relativas a la efectividad de otros derechos fundamentales”*,** así como que regula los plazos de peticiones ***“salvo norma especial”*** que disponga algo diferente. Debe precisarse que, efectivamente la Alcaldía Municipal, se encuentra vulnerando el derecho de petición del señor Pedro Regalao Romero, interpuesto y recibido el día 4 de octubre de 2020.

Por tal motivo, se ordenará a la Alcaldía Municipal de Tenerife, Magdalena, que dentro del término de 48 horas, contadas a partir del recibo de la misiva proceda a otorgar respuesta de fondo, clara y debidamente notificada al señor Pedro Regalao Romero, de la petición con fecha de recibo 4 de octubre de 2020.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Promiscuo Municipal de Tenerife, Magdalena, administrando justicia en nombre de la ley,

**RESUELVE:**

1. **AMPARAR** el derecho de petición del señor Pedro Regalao Romero, por las razones previamente expuestas.
2. **ORDENAR** a la Alcaldía Municipal de Tenerife, Magdalena, que dentro del término de 48 horas, contadas a partir del recibo de la misiva proceda a otorgar respuesta de fondo, clara y debidamente notificada al señor Pedro Regalao Romero, de la petición con fecha de recibo 4 de octubre de 2020.
3. En caso de no ser impugnado remitir a la H. Corte Constitucional, para su eventual revisión.
4. **NOTIFICAR** a las partes personalmente

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.**

**HERMES DE JESUS HERNANDEZ VIVES**

**JUEZ**

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**

**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**

**JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE TENERIFE**

**TENERIFE, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE (2020)**

**OFICIO No: 0942**

**REF: ACCIÓN DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA**

**ACCIONANTE: PEDRO JOSE REGALAO MERCADO**

**ACCIONADO: ALCALDÍA MUNICIPAL DE TENERIFE**

**RAD: 2020-00060-00**

**Señor:**

**PEDRO REGALAO ROMERO**

**pedroregalaoromero@gmail.com**

**E.S.D.**

Cordial saludo,

La presente es con el fin de notificarle personalmente por el medio mas inmediato la sentencia de fecha 9 de noviembre de 2020, por medio de la cual se resolvió:

**1.AMPARAR** el derecho de petición del señor Pedro Regalao Romero, por las razones previamente expuestas.

**2.ORDENAR** a la Alcaldía Municipal de Tenerife, Magdalena, que dentro del término de 48 horas, contadas a partir del recibo de la misiva proceda a otorgar respuesta de fondo, clara y debidamente notificada al señor Pedro Regalao Romero, de la petición con fecha de recibo 4 de octubre de 2020.

Se anexa a la presente en formato PDF:

-sentencia de la fecha

- Oficio de la referencia.



**ANA MARIA RINCÓN MÁRQUEZ**

**SECRETARIA**

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**

**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**

**JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE TENERIFE**

**TENERIFE, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE (2020)**

**OFICIO No: 0943**

**REF: ACCIÓN DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA**

**ACCIONANTE: PEDRO JOSE REGALAO MERCADO**

**ACCIONADO: ALCALDÍA MUNICIPAL DE TENERIFE**

**RAD: 2020-00060-00**

**Señor:**

**ALCALDÍA DE TENERIFE**

**E.S.D.**

Cordial saludo,

La presente es con el fin de notificarle personalmente por el medio mas inmediato la sentencia de fecha 9 de noviembre de 2020, por medio de la cual se resolvió:

**1.AMPARAR** el derecho de petición del señor Pedro Regalao Romero, por las razones previamente expuestas.

**2.ORDENAR** a la Alcaldía Municipal de Tenerife, Magdalena, que dentro del término de 48 horas, contadas a partir del recibo de la misiva proceda a otorgar respuesta de fondo, clara y debidamente notificada al señor Pedro Regalao Romero, de la petición con fecha de recibo 4 de octubre de 2020.

Se anexa a la presente en formato PDF:

-sentencia de la fecha

- Oficio de la referencia.



**ANA MARIA RINCÓN MÁRQUEZ**

**SECRETARIA**

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**

**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**

**JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE TENERIFE**

**TENERIFE, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE (2020)**

**OFICIO No: 0944**

**REF: ACCIÓN DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA**

**ACCIONANTE: PEDRO JOSE REGALAO MERCADO**

**ACCIONADO: ALCALDÍA MUNICIPAL DE TENERIFE**

**RAD: 2020-00060-00**

**Señor:**

**SECRETARIO DE INTERIOR DE TENERIFE**

**interior@tenerife-magdalnea.gov.co**

**E.S.D.**

Cordial saludo,

La presente es con el fin de notificarle personalmente por el medio mas inmediato la sentencia de fecha 9 de noviembre de 2020, por medio de la cual se resolvió:

**1.AMPARAR** el derecho de petición del señor Pedro Regalao Romero, por las razones previamente expuestas.

**2.ORDENAR** a la Alcaldía Municipal de Tenerife, Magdalena, que dentro del término de 48 horas, contadas a partir del recibo de la misiva proceda a otorgar respuesta de fondo, clara y debidamente notificada al señor Pedro Regalao Romero, de la petición con fecha de recibo 4 de octubre de 2020.

Se anexa a la presente en formato PDF:

-sentencia de la fecha

- Oficio de la referencia.



**ANA MARIA RINCÓN MÁRQUEZ**

**SECRETARIA**

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**

**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**

**JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE TENERIFE**

**TENERIFE, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE (2020)**

**OFICIO No: 0944**

**REF: ACCIÓN DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA**

**ACCIONANTE: PEDRO JOSE REGALAO MERCADO**

**ACCIONADO: ALCALDÍA MUNICIPAL DE TENERIFE**

**RAD: 2020-00060-00**

**Señor:**

**DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD SOCIAL**

[**Notificaciones.Juridica@ProsperidadSocial.gov.co**](mailto:Notificaciones.Juridica@ProsperidadSocial.gov.co)

**E.S.D.**

Cordial saludo,

La presente es con el fin de notificarle personalmente por el medio mas inmediato la sentencia de fecha 9 de noviembre de 2020, por medio de la cual se resolvió:

**1.AMPARAR** el derecho de petición del señor Pedro Regalao Romero, por las razones previamente expuestas.

**2.ORDENAR** a la Alcaldía Municipal de Tenerife, Magdalena, que dentro del término de 48 horas, contadas a partir del recibo de la misiva proceda a otorgar respuesta de fondo, clara y debidamente notificada al señor Pedro Regalao Romero, de la petición con fecha de recibo 4 de octubre de 2020.

Se anexa a la presente en formato PDF:

-sentencia de la fecha

- Oficio de la referencia.



**ANA MARIA RINCÓN MÁRQUEZ**

**SECRETARIA**

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**

**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**

**JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE TENERIFE**

**TENERIFE, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE (2020)**

**OFICIO No: 0884**

**REF: ACCIÓN DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA**

**ACCIONANTE: PEDRO JOSE REGALAO MERCADO**

**ACCIONADO: ALCALDÍA MUNICIPAL DE TENERIFE**

**RAD: 2020-00060-00**

**Señor:**

**PROCURADURIA PROVINCIAL- CARMEN DE BOLÍVAR**

[**Provincial.carmendebolivar@procuraduria.gov.co**](mailto:Provincial.carmendebolivar@procuraduria.gov.co)

[**jcohen@procuraduria.gov.co**](mailto:jcohen@procuraduria.gov.co)

**E.S.D.**

Cordial saludo,

La presente es con el fin de notificarle personalmente por el medio mas inmediato la sentencia de fecha 9 de noviembre de 2020, por medio de la cual se resolvió:

**1.AMPARAR** el derecho de petición del señor Pedro Regalao Romero, por las razones previamente expuestas.

**2.ORDENAR** a la Alcaldía Municipal de Tenerife, Magdalena, que dentro del término de 48 horas, contadas a partir del recibo de la misiva proceda a otorgar respuesta de fondo, clara y debidamente notificada al señor Pedro Regalao Romero, de la petición con fecha de recibo 4 de octubre de 2020.

Se anexa a la presente en formato PDF:

-sentencia de la fecha

- Oficio de la referencia.



**ANA MARIA RINCÓN MÁRQUEZ**

**SECRETARIA**

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**

**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**

**JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE TENERIFE**

**TENERIFE, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE (2020)**

**OFICIO No: 0946**

**REF: ACCIÓN DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA**

**ACCIONANTE: PEDRO JOSE REGALAO MERCADO**

**ACCIONADO: ALCALDÍA MUNICIPAL DE TENERIFE**

**RAD: 2020-00060-00**

**Señor:**

**DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD SOCIAL DEPENDENCIA TENERIFE**

**E.S.D.**

Cordial saludo,

La presente es con el fin de notificarle personalmente por el medio mas inmediato la sentencia de fecha 9 de noviembre de 2020, por medio de la cual se resolvió:

**1.AMPARAR** el derecho de petición del señor Pedro Regalao Romero, por las razones previamente expuestas.

**2.ORDENAR** a la Alcaldía Municipal de Tenerife, Magdalena, que dentro del término de 48 horas, contadas a partir del recibo de la misiva proceda a otorgar respuesta de fondo, clara y debidamente notificada al señor Pedro Regalao Romero, de la petición con fecha de recibo 4 de octubre de 2020.

Se anexa a la presente en formato PDF:

-sentencia de la fecha

- Oficio de la referencia.



**ANA MARIA RINCÓN MÁRQUEZ**

**SECRETARIA**

1. Sentencia T-251 de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. [↑](#footnote-ref-1)
2. Artículo 5 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015: “*DERECHOS DE LAS PERSONAS ANTE LAS AUTORIDADES. En sus relaciones con las autoridades toda persona tiene derecho a: // 1. Presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, verbalmente, o por escrito, o por cualquier otro medio idóneo y sin necesidad de apoderado, así como a obtener información y orientación acerca de los requisitos que las disposiciones vigentes exijan para tal efecto. // Las anteriores actuaciones podrán ser adelantadas o promovidas por cualquier medio tecnológico o electrónico disponible en la entidad, aún por fuera de las horas de atención al público. (…)”* Artículo 13: “OBJETO Y MODALIDADES DEL DERECHO DE PETICIÓN ANTE AUTORIDADES. *Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma. // Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos. // El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de representación a través de abogado, o de persona mayor cuando se trate de menores en relación a las entidades dedicadas a su protección o formación.*” [↑](#footnote-ref-2)
3. “*ARTÍCULO 14. TÉRMINOS PARA RESOLVER LAS DISTINTAS MODALIDADES DE PETICIONES. <Artículo modificado por el artículo*[*1*](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1755_2015.html#1)*de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: // 1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes. // 2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. // PARÁGRAFO. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.”* [↑](#footnote-ref-3)
4. Sentencia T-610 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Véase también, entre otras, las sentencias T-430 de 2017, T-206 de 2018, T-217 de 2018, T-397 de 2018 y T-007 de 2019. [↑](#footnote-ref-4)
5. Desde sus inicios, esta Corporación diferenció el derecho de petición del derecho de lo pedido. Puntualmente, se ha dicho que: “no se debe confundir el derecho de petición (…) con el contenido de lo que se pide, es decir[,] con la materia de la petición. La falta de respuesta o la resolución tardía son formas de violación de aquél y son susceptibles de la actuación protectora del juez mediante el uso de la acción de tutela, pues en tales casos se conculca un derecho constitucional fundamental. En cambio, lo que se debate ante la jurisdicción cuando se acusa el acto, expreso o presunto, proferido por la administración, alude al fondo de lo pedido, de manera independiente del derecho de petición como tal. Allí se discute la legalidad de la actuación administrativa o del acto correspondiente, de acuerdo con las normas a las que estaba sometida la administración, es decir que no está en juego el derecho fundamental de que se trata sino otros derechos para cuya defensa existen las vías judiciales contempladas en el Código Contencioso Administrativo y, por tanto, respecto de ella no cabe la acción de tutela salvo la hipótesis del perjuicio irremediable (artículo 86 C.N).” Sentencia T-242 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Véanse también, entre otras, las Sentencias T-180 de 2001, T-192 de 2007, T-558 de 2012 y T-155 de 2018. [↑](#footnote-ref-5)
6. Artículo 74 de la Constitución Política: *“Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley. (…)”*  [↑](#footnote-ref-6)
7. Capítulo V de la Ley 1437 de 2011, sobre PUBLICACIONES, CITACIOES, COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES. [↑](#footnote-ref-7)
8. Ley 1437 de 2011: “*ARTÍCULO 15. PRESENTACIÓN Y RADICACIÓN DE PETICIONES. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Las peticiones podrán presentarse verbalmente y deberá quedar constancia de la misma, o por escrito, y a través de cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos. Los recursos se presentarán conforme a las normas especiales de este código. // Cuando una petición no se acompañe de los documentos e informaciones requeridos por la ley, en el acto de recibo la autoridad deberá indicar al peticionario los que falten. // Si este insiste en que se radique, así se hará dejando constancia de los requisitos o documentos faltantes. Si quien presenta una petición verbal pide constancia de haberla presentado, el funcionario la expedirá en forma sucinta. // Las autoridades podrán exigir que ciertas peticiones se presenten por escrito, y pondrán a disposición de los interesados, sin costo, a menos que una ley expresamente señale lo contrario, formularios y otros instrumentos estandarizados para facilitar su diligenciamiento. En todo caso, los peticionarios no quedarán impedidos para aportar o formular con su petición argumentos, pruebas o documentos adicionales que los formularios no contemplen, sin que por su utilización las autoridades queden relevadas del deber de resolver sobre todos los aspectos y pruebas que les sean planteados o presentados más allá del contenido de dichos formularios. // A la petición escrita se podrá acompañar una copia que, recibida por el funcionario respectivo con anotación de la fecha y hora de su presentación, y del número y clase de los documentos anexos, tendrá el mismo valor legal del original y se devolverá al interesado a través de cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos. Esta autenticación no causará costo alguno al peticionario. // PARÁGRAFO 1o. En caso de que la petición sea enviada a través de cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos, esta tendrá como datos de fecha y hora de radicación, así como el número y clase de documentos recibidos, los registrados en el medio por el cual se han recibido los documentos. // PARÁGRAFO 2o. Ninguna autoridad podrá negarse a la recepción y radicación de solicitudes y peticiones respetuosas. // PARÁGRAFO 3o. Cuando la petición se presente verbalmente ella deberá efectuarse en la oficina o dependencia que cada entidad defina para ese efecto. El Gobierno Nacional reglamentará la materia en un plazo no mayor a noventa (90) días, a partir de la promulgación de la presente ley.”* [↑](#footnote-ref-8)
9. Sentencia T-1075 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. [↑](#footnote-ref-9)
10. Sobre esta modalidad, es preciso traer a colación lo advertido por esta Corporación en la Sentencia C-951 de 2014: “Por otra parte, de acuerdo a la interpretación sistemática del enunciado normativo, cuando allí se alude a la posibilidad de apelar al derecho de petición para formular denuncias e interponer recursos no hace referencia a aquellas denuncias que dan inicio a una actuación penal, ni la interposición de recursos incluye aquellos que en ejercicio del derecho a la defensa puedan instaurarse en el curso de las actuaciones judiciales, cuyo trámite se regirá por las reglas que particularmente fijen los procedimientos judiciales, toda vez que debe entenderse que el artículo 13 que el legislador estatutario incorpora a la parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se aplica frente a las actuaciones administrativas, no así a los procesos judiciales[199].” De igual forma, es precio destacar que tampoco cabe para abrir procesos disciplinarios o fiscales. [↑](#footnote-ref-10)